



Asamblea General

Distr. general
23 de mayo de 2024
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Opiniones aprobadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en su 99º período de sesiones, 18 a 27 de marzo de 2024

Opinión núm. 10/2024, relativa a Muhammad al-Ghamdi (Arabia Saudita)*

1. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria fue establecido en virtud de la resolución 1991/42 de la Comisión de Derechos Humanos. En su resolución 1997/50, la Comisión prorrogó y aclaró el mandato del Grupo de Trabajo. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución 60/251 de la Asamblea General y en la decisión 1/102 del Consejo de Derechos Humanos, el Consejo asumió el mandato de la Comisión. La última vez que el Consejo prorrogó el mandato del Grupo de Trabajo por tres años fue en su resolución 51/8.

2. De conformidad con sus métodos de trabajo¹, el Grupo de Trabajo transmitió el 7 de enero de 2023 al Gobierno de la Arabia Saudita una comunicación relativa a Muhammad al-Ghamdi. El Gobierno respondió a la comunicación el 3 de enero de 2024. El Estado no es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

3. El Grupo de Trabajo considera arbitraria la privación de libertad en los casos siguientes:

a) Cuando es manifiestamente imposible invocar fundamento jurídico alguno que la justifique (como el mantenimiento en reclusión de una persona tras haber cumplido su condena o a pesar de una ley de amnistía que le sea aplicable) (categoría I);

b) Cuando la privación de libertad resulta del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por los artículos 7, 13, 14, 18, 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y, respecto de los Estados partes, por los artículos 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (categoría II);

c) Cuando la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial, establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los instrumentos internacionales pertinentes aceptados por los Estados interesados, es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario (categoría III);

d) Cuando los solicitantes de asilo, inmigrantes o refugiados son objeto de detención administrativa prolongada sin posibilidad de examen o recurso administrativo o judicial (categoría IV);

e) Cuando la privación de libertad constituye una vulneración del derecho internacional por tratarse de discriminación por motivos de nacimiento, origen nacional,

* Miriam Estrada Castillo no participó en el examen del presente caso.

¹ [A/HRC/36/38](#).



étnico o social, idioma, religión, condición económica, opinión política o de otra índole, género, orientación sexual, discapacidad u otra condición, que lleva o puede llevar a ignorar el principio de igualdad de los seres humanos (categoría V).

1. Información recibida

a) Comunicación de la fuente

4. Muhammad al-Ghamdi es nacional de la Arabia Saudita, nacido en 1968. Tiene titulación universitaria y es maestro jubilado con residencia habitual en La Meca (Arabia Saudita).

i) Contexto

5. La fuente afirma que la situación del Sr. Al-Ghamdi se inscribe en el marco de una práctica generalizada destinada a silenciar a la disidencia y la oposición en la Arabia Saudita.

6. El Sr. Al-Ghamdi no es activista político ni por los derechos humanos, sino un ciudadano particular que expresó pacíficamente su opinión y sus preocupaciones en Internet en publicaciones en medios sociales y consultó y siguió cuentas en medios sociales en las que se abordan cuestiones políticas y sociales. Antes de su reclusión, el Sr. Al-Ghamdi tenía buena reputación y nunca había sido detenido ni encarcelado.

7. En las opiniones que publicaba en los medios sociales, entre otras cosas expresaba preocupación por la opresión y la corrupción del Gobierno, los derechos de las personas privadas de libertad, el desempleo y el elevado costo de la vida en la Arabia Saudita.

ii) Detención y privación de libertad

8. La fuente informa de que, el 11 de junio de 2022, el Sr. Al-Ghamdi fue detenido por un detective de los servicios de seguridad sauditas frente a su domicilio, en el barrio de Al-Nouriyah de La Meca.

9. Según se informa, el Sr. Al-Ghamdi fue recluso inicialmente en la prisión de Dhahban, dependiente de la Presidencia de la Seguridad del Estado en Yeda. Durante los primeros cuatro meses de su encarcelamiento tras su detención el 11 de junio de 2022, al parecer estuvo recluso en régimen de aislamiento e incomunicación sin que se le explicaran las razones de esa medida. Se afirma que, cuando estaba recluso en régimen de aislamiento, fue interrogado sin tener acceso a representación o asistencia letrada.

10. El 26 de junio de 2022 se emitió un escrito judicial en el que, al parecer, se confirmaban las acusaciones formuladas contra el Sr. Al-Ghamdi y se demostraba que habían sido motivadas por las opiniones y preocupaciones que este había expresado en medios sociales y en las cuentas de medios sociales que había consultado y seguido. Según la fuente, en el escrito se hablaba de dos cuentas anónimas en medios sociales que tenían dos y ocho seguidores respectivamente. Esta información se incluyó posteriormente en el fallo y la sentencia condenatoria de 13 de julio de 2023.

11. Según se informa, el Sr. Al-Ghamdi fue acusado de delitos tipificados en los artículos 30, 34, 43 y 44 de la Ley de Lucha contra el Terrorismo y la Financiación del Terrorismo de 2017, y el Fiscal solicitó la pena máxima, la pena de muerte, por cada delito. Lo acusaban de utilizar Internet y sus dispositivos electrónicos, en contravención del artículo 43 de la ley, para publicar comentarios que supuestamente atentaban contra la religión y la justicia del Rey y el Príncipe heredero, en contravención del artículo 30; difundir rumores falsos con la intención de alterar el orden público, desestabilizar la seguridad de la sociedad y poner en peligro la unidad nacional, en contravención del artículo 44; apoyar ideologías terroristas y a un grupo terrorista, en contravención del artículo 34; y traicionar su religión, a su país y a sus gobernantes.

12. Según la fuente, el Gobierno no designó un abogado para que representara al Sr. Al-Ghamdi hasta diciembre de 2022, de manera que este estuvo sin representación letrada desde que lo detuvieron, el 11 de junio de 2022, hasta diciembre de 2022, lo que incluye los cuatro primeros meses de su reclusión en los que estuvo en régimen de aislamiento e incomunicación y fue interrogado.

13. La fuente señala que se temía que el abogado asignado por el Gobierno fuera parcial y pudiera perjudicar la defensa del Sr. Al-Ghamdi. Por ejemplo, no estuvo presente en ninguno de los interrogatorios a los que el Sr. Al-Ghamdi fue sometido entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, y no quiso reconocer los trastornos mentales que le habían diagnosticado ni utilizar los informes médicos existentes, que podrían haber constituido medios de defensa conforme a lo previsto en la legislación saudita.

14. Según se informa, en enero de 2023 trasladaron al Sr. Al-Ghamdi a la prisión de Al-Ha'ir a la espera de su juicio, que comenzó en mayo de 2023. Fue entonces cuando el Sr. Al-Ghamdi compareció por primera vez ante un juez, casi un año después de su detención en junio de 2022.

15. La fuente añade que se celebraron tres o cuatro sesiones antes de la sesión final del juicio, celebrada el 10 de julio de 2023, en la que se dictó sentencia y el acusado fue condenado a muerte.

16. Al parecer, el abogado del Sr. Al-Ghamdi fue despedido en marzo de 2023 por las sospechas de parcialidad mencionadas más arriba. No obstante, debido a las dificultades para encontrar un nuevo abogado, la familia del Sr. Al-Ghamdi no contrató a otro abogado hasta el 2 de mayo de 2023. Por lo tanto, el Sr. Al-Ghamdi estuvo sin representación letrada desde marzo de 2023, cuando despidieron a su primer abogado, hasta el 2 de mayo de 2023, fecha en que contrataron al nuevo.

17. Según se informa, el segundo abogado del Sr. Al-Ghamdi no fue contratado hasta poco antes del inicio del juicio en mayo de 2023, por lo que no tuvo tiempo suficiente para leer el expediente y prepararse. Además, a pesar de sus intentos de reunirse antes con su cliente, al parecer solo pudo comunicarse con él brevemente antes de las sesiones del juicio.

18. El 10 de julio de 2023, el Tribunal Penal Especializado condenó a muerte al Sr. Al-Ghamdi. La fuente afirma que su familia intentó asistir al juicio, pero se lo impidieron.

19. En la sentencia y en la resolución condenatoria dictadas en la sesión celebrada el 10 de julio de 2023 y en el escrito correspondiente de esa misma fecha se indicaba, al parecer, que, conforme a lo exigido por la ley, se daría traslado de todo el expediente de la causa al tribunal de apelación para que lo examinara. A este respecto, la fuente entiende que el proceso de apelación sigue abierto, pero tiene poca información sobre su marcha.

20. Según se informa, no ha habido novedades en el procedimiento de apelación y el Sr. Al-Ghamdi ha sido devuelto a la prisión de Dhahban, en Yeda, donde se encuentra recluido. Desde entonces, no ha vuelto a saberse nada del procedimiento. No se ha celebrado ninguna vista del recurso, que podría resolverse sin la correspondiente sesión ante un juez.

21. Según la fuente, parece que el tribunal de apelación resolverá el recurso muy pronto, lo que hace temer que confirme de manera fulminante las acusaciones y la condena contra el Sr. Al-Ghamdi, lo que permitiría a las autoridades ejecutar la pena de muerte. Además, las comunicaciones del Sr. Al-Ghamdi con su abogado se han visto aún más limitadas, puesto que solo puede entrevistarse con él antes de las sesiones del juicio y el proceso ha entrado en la fase de apelación sin que se haya señalado ninguna vista.

22. Al parecer, recientemente se ha autorizado a los familiares del Sr. Al-Ghamdi a visitarlo, pero no han podido hablar libremente con él.

23. La fuente afirma que la negativa a prestar atención médica adecuada al Sr. Al-Ghamdi ha contribuido al dolor y el sufrimiento que este ha experimentado durante su reclusión, y que se han cometido violaciones de sus derechos fundamentales que han culminado en un trato cruel, inhumano y degradante y una tortura psicológica. Señala que fue sometido a enormes presiones y sufrimientos emocionales y psicológicos porque lo recluyeron en régimen de aislamiento, sin explicación alguna, durante los cuatro primeros meses de su encarcelamiento sin poder acceder a un abogado ni comunicarse con su familia; porque no se le ha permitido tener un abogado durante una gran parte del tiempo que ha estado recluido; y porque no le han prestado atención médica y ni le han proporcionado los medicamentos que necesita y que le han recetado para tratar sus problemas de salud, a saber, esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno delirante, lo que ha provocado un deterioro de su estado de salud.

24. La fuente destaca que el Sr. Al-Ghamdi ha sufrido una enorme presión psicológica durante su reclusión y que, como no le han dado la medicación que se le ha recetado para tratar sus trastornos mentales, su estado se ha descontrolado, sobre todo después de que lo condenaran a muerte.

iii) *Obligaciones de derecho internacional*

25. La fuente afirma que, aunque la privación de libertad y el proceso judicial del Sr. Al-Ghamdi se rigen por el derecho interno, la Arabia Saudita está obligada a aplicar el derecho internacional que se ha comprometido a respetar.

26. Según la fuente, la Arabia Saudita debe respetar los derechos y protecciones establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General². Además, es parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y ha ratificado la Carta Árabe de Derechos Humanos. Debe guiarse por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela).

iv) *Análisis jurídico*

27. La fuente sostiene que la detención y la privación de libertad del Sr. Al-Ghamdi son arbitrarias y se inscriben en las categorías II y III.

a) *Categoría II*

28. La fuente recuerda que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra los derechos a la libertad de expresión y de asociación en sus artículos 18, 19 y 20. Concretamente, el artículo 19 garantiza no solo el derecho a la libertad de opinión y de expresión, sino también a investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

29. Según se afirma, aunque el Sr. Al-Ghamdi no es un activista político ni por los derechos humanos, en los últimos años ha expresado cada vez más a menudo en Internet sus opiniones y preocupaciones sobre la supuesta opresión y corrupción del Gobierno, los derechos de las personas privadas de libertad, el desempleo y el elevado costo de la vida en la Arabia Saudita.

30. La fuente sostiene que varios factores demuestran que la detención y reclusión del Sr. Al-Ghamdi, así como su enjuiciamiento, su declaración de culpabilidad y su condena a muerte, resultaron del ejercicio legítimo de sus derechos humanos y, concretamente, que su privación de libertad es consecuencia del ejercicio de los derechos o libertades garantizados por la Declaración Universal de Derechos Humanos³. Entre esos factores, cita el escrito judicial en el que se confirmaron las acusaciones de la fiscalía, las preguntas que le hicieron cuando lo interrogaron después de ser detenido y la sentencia dictada en su juicio, en la que lo declararon culpable de los delitos de los que se lo acusaba y lo condenaron a muerte.

31. La fuente señala que, tras la detención del Sr. Al-Ghamdi el 11 de junio de 2022, un escrito judicial de 26 de junio de 2022 confirmó las acusaciones formuladas en su contra y demostró que habían sido motivadas por las opiniones y preocupaciones que había expresado en medios sociales y en las cuentas de medios sociales que había consultado y seguido.

32. Según se afirma, tras su detención y acusación, los interrogatorios a los que fue sometido el Sr. Al-Ghamdi durante su reclusión demuestran que fue detenido, encarcelado y procesado por los servicios de seguridad sauditas por haber expresado públicamente sus pensamientos, opiniones y preocupaciones sobre las acciones y políticas del Gobierno.

33. Al parecer, los interrogatorios del Sr. Al-Ghamdi se centraron en sus publicaciones en medios sociales y en sus opiniones políticas. También le preguntaron qué pensaba y si simpatizaba con determinados presos políticos o presos de conciencia que también habían

² Resolución 217 A (III) de la Asamblea General.

³ Véase *Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria: Folleto Informativo núm. 26 Rev. 1* (publicación de las Naciones Unidas, 2024).

sido detenidos y encausados por las autoridades sauditas por ejercer su derecho a la libertad de expresión, especialmente en Internet y en medios sociales.

34. La fuente afirma también que, en la sentencia de 10 de julio de 2023, el Tribunal Penal Especializado confirmó la declaración de culpabilidad del Sr. Al-Ghamdi por los delitos que se le imputaban, que únicamente guardaban relación con las opiniones y preocupaciones que había expresado y los contenidos que había consultado en medios sociales. Además, el tribunal lo condenó a muerte y declaró que se le castigaba públicamente por los crímenes atroces que había cometido.

35. La fuente señala que el Grupo de Trabajo ha constatado anteriormente que toda vulneración del derecho a la libertad de expresión y de asociación, y cualesquiera detención, reclusión y procesamiento judicial resultantes del ejercicio de esos derechos, confieren a la privación de libertad de la persona reclusa carácter arbitrario⁴. Recuerda que este también ha constatado que manifestar críticas hacia el propio país y sus dirigentes y comunicarse con otros actores políticos de forma pacífica no debe asimilarse a un intento de derrocar al Gobierno, y que las restricciones de esos derechos no se pueden considerar proporcionadas ni justificadas⁵.

36. Según la fuente, tras la aprobación de la legislación antiterrorista en 2014, hay informaciones que han documentado campañas represivas de detenciones de ciudadanos y activistas acusados de hechos relacionados con la libertad de opinión y de expresión⁶. Al parecer, esas campañas proseguían cuando el Sr. Al-Ghamdi fue detenido, encarcelado, declarado culpable y condenado a muerte por expresar sus opiniones.

37. Según se informa, la creciente atención prestada por la Arabia Saudita a la expresión en línea de opiniones disidentes y críticas contra el Gobierno ha ido acompañada de la aplicación de leyes antiterroristas y duras penas. La fuente sostiene que las penas que prevé la Ley de Lucha contra el Terrorismo y la Financiación del Terrorismo por expresar opiniones en línea, que incluyen la pena de muerte y penas de prisión de varios decenios, son desproporcionadas en comparación con las previstas para delitos graves como el uso de explosivos o el secuestro de vehículos, buques y aeronaves, castigados con una pena máxima de 30 años de prisión.

38. La fuente concluye que la privación de libertad del Sr. Al-Ghamdi resulta del ejercicio legítimo de sus derechos a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la libertad de expresión y de opinión y a la libertad de asociación y de reunión, y es arbitraria con arreglo a la categoría II.

b) Categoría III

39. La fuente sostiene que la privación de libertad del Sr. Al-Ghamdi es arbitraria y se inscribe en la categoría III porque se han vulnerado su derecho fundamental a un juicio justo y su derecho a acceder a un tribunal independiente e imparcial.

40. La fuente aduce que, además de por la disposición general sobre el derecho a un juicio imparcial enunciada en el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Arabia Saudita debe guiarse por las Reglas Nelson Mandela.

41. La fuente recuerda que el régimen de aislamiento y el régimen de incomunicación son contrarios a las protecciones internacionales. La regla 43 de las Reglas Nelson Mandela prohíbe el aislamiento indefinido y el aislamiento prolongado. Como se establece en la regla 3, la prisión y demás medidas cuyo efecto es separar a una persona del mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan a esa persona de su derecho a la autodeterminación al privarla de su libertad. La falta de justificación o necesidad de la reclusión en régimen de aislamiento o incomunicación agrava el sufrimiento inherente a esa situación.

⁴ Véase la opinión núm. 60/2013.

⁵ *Ibid.*, párr. 21.

⁶ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “UN rights expert raises alarm over Saudi Arabia’s growing clamp down on freedom of expression”, 16 de diciembre de 2015.

42. La fuente recuerda que el Sr. Al-Ghamdi no gozó de tales protecciones durante los cuatro primeros meses de su privación de libertad.
43. La fuente afirma que el Sr. Al-Ghamdi no solo estuvo en régimen de aislamiento, sino también en régimen de incomunicación, puesto que durante cuatro meses se impidió a su familia ponerse en contacto con él o visitarlo. Cuando se puso fin al régimen de aislamiento, al parecer autorizaron al Sr. Al-Ghamdi a llamar a su familia y a recibir un número limitado de visitas hasta enero de 2023, cuando fue trasladado a la prisión de Al-Ha'ir, en Riad, situada a unos 945 km de distancia y demasiado lejos para recibir visitas familiares periódicas.
44. La fuente destaca la enorme vulnerabilidad del Sr. Al-Ghamdi durante los primeros cuatro meses de su privación de libertad, cuando estuvo recluido en régimen de aislamiento e incomunicación. Al parecer, durante ese período lo interrogaron sin representación letrada.
45. Según la fuente, al no tener la asistencia de un abogado cuando lo interrogaron mientras estaba en régimen de aislamiento, el Sr. Al-Ghamdi pudo sufrir cualquier trato sin vigilancia y posibles malos tratos en contravención del artículo 15 de la Convención contra la Tortura, por lo que existe el riesgo de que las declaraciones que realizó durante su interrogatorio e invocadas en el juicio se hayan obtenido de forma indebida, coercitiva o sin que el Sr. Al-Ghamdi comprendiera plenamente las acusaciones formuladas en su contra, el derecho aplicable y el procedimiento.
46. La fuente recuerda que las Reglas Nelson Mandela reconocen que la naturaleza aflictiva del encarcelamiento se ve agravada por situaciones como el régimen de aislamiento y de incomunicación, que son perjudiciales para el bienestar de los presos.
47. Teniendo en cuenta todo lo que antecede, la fuente concluye que el fundamento jurídico de la reclusión del Sr. Al-Ghamdi no es accesible ni comprensible ni se aplica de manera coherente y previsible⁷, y que esa reclusión es arbitraria.
48. La fuente señala que la legislación nacional de la Arabia Saudita establece que todas las personas acusadas tienen derecho a solicitar la asistencia de un abogado o representante que los defienda durante la fase de instrucción y el juicio. Las Reglas Nelson Mandela también garantizan el derecho a la representación letrada en el momento de la detención y la inculpación, así como durante el proceso judicial.
49. Según la fuente, durante su privación de libertad, sus interrogatorios y la preparación del juicio, se vulneró el derecho del Sr. Al-Ghamdi a contratar y consultar a un abogado.
50. Según se afirma, el Sr. Al-Ghamdi no tuvo acceso a un abogado durante los interrogatorios a los que fue sometido cuando estaba en régimen de aislamiento durante los primeros cuatro meses de su encarcelamiento. Además, dado que, cuando lo interrogaron, le preguntaron por las opiniones que había expresado y por sus relaciones y las personas con las que parecía simpatizar, habría sido imperativo asegurarse de que tuviera acceso a asistencia letrada y comprendiera plenamente las acusaciones formuladas en su contra, las actuaciones previstas en la Ley de Lucha contra el Terrorismo y la Financiación del Terrorismo y el proceso ante el Tribunal Penal Especializado.
51. La fuente informa de que el Sr. Al-Ghamdi no tuvo un abogado de oficio hasta diciembre de 2022, lo que significa que, desde que lo detuvieron el 11 de junio de 2022 y durante todo el tiempo que estuvo encarcelado hasta diciembre de 2022, no tuvo acceso a asistencia letrada. Recuerda que, durante los primeros cuatro meses de su reclusión, el Sr. Al-Ghamdi estuvo en régimen de aislamiento e incomunicación y fue interrogado.
52. Se alega también que el abogado de oficio mostró una predisposición negativa hacia el Sr. Al-Ghamdi y actuó en contra de sus intereses y de su capacidad para preparar y presentar una defensa. Por ejemplo, la fuente explica que no quiso reconocer los trastornos mentales diagnosticados a su cliente ni utilizar los informes médicos existentes, que podrían haber constituido medios de defensa conforme a lo previsto en la legislación saudita. Habría sido importante aducir esa defensa, puesto que afirmar que el Sr. Al-Ghamdi actuó en

⁷ [A/HRC/22/44](#), párr. 62.

ejercicio de su derecho a la libertad de expresión no constituye una defensa viable en la Arabia Saudita.

53. La fuente explica que ningún abogado quiso invocar los trastornos mentales diagnosticados al Sr. Al-Ghamdi por temor a sufrir graves consecuencias, entre ellas su detención o la revocación de su licencia, como al parecer les había ocurrido a otros abogados y a un exjuez. Sostiene que, como el abogado no quiso reconocer esos trastornos mentales ni invocarlos como medio de defensa conforme a la legislación saudita, se solicitó un cambio de abogado y se despidió al abogado de oficio en marzo de 2023. Así pues, la familia del Sr. Al-Ghamdi tuvo que encontrar y contratar a un abogado para él.

54. Al parecer, la búsqueda de un abogado que representara al Sr. Al-Ghamdi fue difícil y exigió grandes esfuerzos. Según la fuente, muchos de los abogados contactados no quisieron hacerse cargo por temor a represalias de las autoridades, en particular a ser detenidos. Hasta el 2 de mayo de 2023 no se encontró y contrató a un segundo abogado para que representara al Sr. Al-Ghamdi, lo que significa que este estuvo otra vez sin representación letrada, entre marzo y mayo de 2023. La fuente añade que la contratación del abogado no se materializó y reconoció hasta después de que se diera traslado de la causa al Tribunal Penal Especializado en mayo de 2023.

55. Según la fuente, las autoridades sauditas deberían haber sabido que el Sr. Al-Ghamdi carecía de abogado, en particular para estar presente y prestar asistencia en los interrogatorios o preparar el juicio. Sin embargo, siguió encarcelado y su procesamiento siguió adelante a pesar de no tener representación letrada y en violación de sus derechos, lo que le impidió impugnar su reclusión ante un tribunal o solicitar su comparecencia ante un juez.

56. La fuente sostiene que el acceso del Sr. Al-Ghamdi al abogado contratado en mayo de 2023 también es motivo de preocupación, y recuerda la regla 120 de las Reglas Nelson Mandela. Al parecer, el Sr. Al-Ghamdi solo pudo hablar o reunirse con su abogado antes de las sesiones del juicio, por lo que apenas pudo hacer las preguntas necesarias para comprender plenamente las acusaciones y actuaciones en su contra, dar instrucciones al abogado y participar en la preparación de su defensa.

57. La fuente concluye que se ha vulnerado el derecho del Sr. Al-Ghamdi a tener representación letrada, lo que ha afectado a su derecho a un juicio imparcial con las debidas garantías.

58. La fuente recuerda las reglas 61 y 120, párrafo 1, de las Reglas Nelson Mandela, que proporcionan orientación sobre el derecho de los reclusos a disponer de oportunidades, tiempo y medios adecuados para recibir visitas de un asesor jurídico de su elección, entrevistarse con él y consultarle sin demora y en forma plenamente confidencial.

59. Al parecer, al Sr. Al-Ghamdi le denegaron esas protecciones y, en consecuencia, el derecho a un juicio imparcial. Según la fuente, hubo dos momentos en los que este no estuvo representado por un abogado que defendiera sus intereses: primero, desde que lo detuvieron hasta que el Gobierno le asignó un abogado; y, después, desde que despidieron a ese abogado en marzo de 2023 hasta que su familia contrató a otro en mayo de ese año. Supuestamente el Sr. Al-Ghamdi fue interrogado en esos intervalos.

60. La fuente añade que el Sr. Al-Ghamdi solo tenía acceso al abogado que había contratado antes de las comparecencias y sesiones del juicio y que, por lo tanto, no dispuso de tiempo ni medios adecuados para consultar a su abogado, darle instrucciones y participar en la preparación de su defensa.

61. Se afirma que, en lugar de poder utilizar todos los medios previstos para defender a su cliente, el abogado del Sr. Al-Ghamdi solo pudo formular alegatos de defensa, sin que se le permitiera citar testigos.

62. Al parecer, el tribunal no tuvo en cuenta los informes médicos existentes que el segundo abogado del Sr. Al-Ghamdi pretendía invocar para defender a su cliente de las acusaciones formuladas en su contra, conforme a lo previsto en la legislación saudita, y además rechazó las peticiones de la defensa de que una autoridad médica examinara el estado de salud mental y psicológica del Sr. Al-Ghamdi.

63. La fuente concluye que el hecho de que el Sr. Al-Ghamdi solo pudiera consultar a un abogado y comunicarse con él de manera limitada cuando estuvo encarcelado y fue interrogado y no pudiera entrevistarse periódicamente con el nuevo abogado que contrató socavó su capacidad para preparar y presentar su defensa. El hecho de que se impidiera a su abogado citar testigos, presentar informes médicos y solicitar un examen médico durante el juicio también socavó la defensa del Sr. Al-Ghamdi, lo que vulneró sus derechos a un juicio imparcial con las debidas garantías.

64. La fuente afirma que se ha vulnerado el derecho del Sr. Al-Ghamdi a un tribunal independiente e imparcial, puesto que las actuaciones de las que fue objeto, incluido su juicio, estuvieron a cargo del Tribunal Penal Especializado. Ese tribunal se creó en 2008 para conocer de las actividades terroristas graves, pero al parecer se ha utilizado cada vez más para perseguir y procesar a personas que expresan opiniones o críticas, así como a activistas pacíficos que disienten de las opiniones del Gobierno.

65. La fuente añade que hay informes sobre los derechos humanos en los que se ha dado la voz de alarma por el hecho de que el Tribunal Penal Especializado juzgue causas que son competencia de otros tribunales nacionales, pero en las que puede imponer penas más duras, y no sea independiente del Ministerio del Interior. Por ejemplo, se afirma que la identidad de los magistrados que juzgaron al Sr. Al-Ghamdi se mantuvo confidencial durante todo el proceso. Al parecer, el tribunal tampoco autorizó a la familia del Sr. Al-Ghamdi a que asistiera a la vista en que se dictó sentencia y se le condenó a muerte, y rechazó los intentos del Sr. Al-Ghamdi de defenderse durante el juicio de ciertas acusaciones detalladas relativas a sus publicaciones en línea, negándole el derecho a cuestionar la exactitud de las declaraciones que le atribúan.

66. La fuente sostiene que el Tribunal Penal Especializado tendría que haber sabido que el Sr. Al-Ghamdi estuvo recluido en régimen de aislamiento durante los cuatro primeros meses de su encarcelamiento, tiempo durante el cual había sido interrogado sin la asistencia de un abogado. También tendría que haber sabido que el Sr. Al-Ghamdi había tenido problemas para contratar a un abogado que defendiera sus intereses, y que no tuvo abogado durante prácticamente el primer año de su encarcelamiento. Sin embargo, al parecer no hizo nada para abordar y subsanar esas vulneraciones del derecho del Sr. Al-Ghamdi a un juicio imparcial, y rechazó las solicitudes de citación de testigos de descargo, la derivación a un especialista médico o la toma en consideración de determinados informes médicos existentes.

67. Se ha vulnerado el derecho del Sr. Al-Ghamdi a un juicio imparcial porque el Tribunal Penal Especializado no es un tribunal independiente ni imparcial.

68. La fuente recuerda que los derechos y protecciones internacionales respaldan el derecho de las personas privadas de libertad a comunicarse periódicamente con su familia.

69. La fuente afirma que, en virtud de la regla 68 de las Reglas Nelson Mandela y el artículo 14 de la Carta Árabe de Derechos Humanos, así como del artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Arabia Saudita está obligada a garantizar que los reclusos puedan comunicarse con sus familiares y recibir periódicamente su visita.

70. La fuente sostiene que se ha privado al Sr. Al-Ghamdi de esos derechos y protecciones durante su reclusión: durante los primeros cuatro meses de su encarcelamiento, cuando estuvo recluido en régimen de aislamiento sin poder comunicarse con su familia; y cuando se puso fin al régimen de aislamiento, ya que solo se le permitieron unas pocas llamadas y visitas esporádicas antes de ser trasladado a la prisión de Al-Ha'ir, en Riad, situada a unos 945 km de donde vivía familia, con lo que le impidieron recibir visitas familiares periódicas.

71. Según se informa, se ha limitado la capacidad del Sr. Al-Ghamdi para comunicarse libremente con su familia en sus conversaciones telefónicas. Por ejemplo, las autoridades interrumpieron una conversación al oír que el Sr. Al-Ghamdi le contaba a su familia los sufrimientos que padecía en la prisión. La fuente señala que, cuando se restringen así las comunicaciones, es posible que los abusos, torturas y otros malos tratos no se denuncien y queden impunes.

72. La fuente señala que las comunicaciones y las visitas familiares contribuyen al bienestar y al sentido de la dignidad de la persona privada de libertad, y que es esencial vigilar que las autoridades cumplan sus obligaciones de proteger y garantizar los derechos

fundamentales. Por ejemplo, afirma que, al impedir que el Sr. Al-Ghamdi viera a su familia y se comunicara con ella durante los primeros cuatro meses de su reclusión, cuando estuvo en régimen de aislamiento, esta no pudo ayudarlo antes a contratar a un abogado adecuado.

73. La fuente concluye que no solo se ha vulnerado el derecho del Sr. Al-Ghamdi a mantener el contacto con su familia, sino que ello ha tenido graves consecuencias y ha dado lugar a otras vulneraciones de su derecho a un juicio imparcial con las debidas garantías.

74. La fuente recuerda el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y las reglas 24 a 35 de las Reglas Nelson Mandela, sobre la atención médica.

75. La fuente sostiene que, antes de que lo detuvieran y encarcelaran, al Sr. Al-Ghamdi le habían diagnosticado afecciones médicas para las que le habían recetado medicamentos que debe tomar regularmente. Entre otras cosas, tiene epilepsia, que le fue diagnosticada siendo un niño y para la que lleva 40 años medicándose, y trastornos mentales por los que estaba siendo tratado y medicado antes de su detención.

76. Según la fuente, aunque las autoridades han seguido suministrando al Sr. Al-Ghamdi su medicación para la epilepsia, no han querido darle los medicamentos que le habían recetado para tratar eficazmente los trastornos mentales que le han diagnosticado, a pesar de los informes médicos existentes que los documentan y de la solicitud de que el Sr. Al-Ghamdi fuera sometido a una evaluación médica, que fue rechazada.

77. La fuente sostiene que, como el Sr. Al-Ghamdi lleva más de un año y cuatro meses, que es el tiempo que lleva recluido, sin medicarse, su estado de salud ha empeorado.

78. La fuente concluye que la Arabia Saudita ha vulnerado el derecho del Sr. Al-Ghamdi a recibir atención médica.

79. Según se afirma, se ha vulnerado y se sigue vulnerando el derecho del Sr. Al-Ghamdi a no ser sometido a malos tratos ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidas posibles torturas psicológicas. Al parecer, los agentes sauditas lo han sometido a una enorme presión emocional y psicológica, en particular durante los primeros cuatro meses de su encarcelamiento, en los que estuvo en régimen de aislamiento e incomunicación sin que le explicaran la necesidad de esa medida.

80. La fuente recuerda que el artículo 15 de la Convención contra la Tortura establece la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante tortura. Sostiene que se colocó al Sr. Al-Ghamdi en una situación en la que fue interrogado bajo presión emocional y psicológica, puesto que no tenía abogado y, por lo tanto, no comprendía plenamente las acusaciones ni el procedimiento en su contra, y temía que sus declaraciones se utilizaran como prueba incriminatoria contra él.

81. Asimismo, la fuente señala que el Sr. Al-Ghamdi aún sufre la presión emocional y el estrés provocados por su reclusión en régimen de aislamiento y de incomunicación.

82. Según la fuente, el estrés y la ansiedad del Sr. Al-Ghamdi aumentaron exponencialmente cuando fue condenado a muerte en un juicio en el que no se respetó su derecho a un juicio imparcial y ante un tribunal que, según el Grupo de Trabajo, no es imparcial ni independiente⁸.

83. La fuente sostiene que la falta de prestación de atención médica adecuada al Sr. Al-Ghamdi, al negarse a proporcionarle la medicación que le habían recetado para el tratamiento de sus trastornos mentales, ha contribuido a vulnerar su derecho a no ser sometido a tortura psicológica y otros tratos humillantes y degradantes. Aduce que el hecho de experimentar un deterioro considerable de su estado de salud psicológica y mental sabiendo que ha sido provocado por la negativa de las autoridades penitenciarias a proporcionarle medicación debe considerarse un trato angustioso, cruel y degradante, y podría entenderse que constituye tortura psicológica.

⁸ Opinión núm. 27/2023, párr. 43.

b) Respuesta del Gobierno

84. El 7 de noviembre de 2023, el Grupo de Trabajo transmitió las alegaciones de la fuente al Gobierno de la Arabia Saudita en el marco de su procedimiento ordinario de comunicaciones. El Grupo de Trabajo solicitó al Gobierno que, a más tardar el 8 de enero de 2024, le proporcionara información detallada sobre la situación actual del Sr. Al-Ghamdi.

85. El Gobierno envió su respuesta el 3 de enero de 2024. Recuerda un llamamiento urgente conjunto de varios titulares de mandatos de los procedimientos especiales, incluido el Grupo de Trabajo, sobre el caso del Sr. Al-Ghamdi⁹ y solicita que su respuesta, de fecha 11 de noviembre de 2023, sea tomada en cuenta por el Grupo de Trabajo cuando emita su opinión.

86. El Gobierno niega toda vulneración inscrita en la categoría II. Afirma que el Sr. Al-Ghamdi fue detenido, inculcado y condenado por el tribunal de primera instancia por delitos de terrorismo, entre ellos tratar de incitar a la sedición, sembrar el caos, perturbar la seguridad pública e incitar a cometer tales actos. Estos actos son injustificables en todas las circunstancias, como se afirma en la Declaración sobre Medidas para Eliminar el Terrorismo Internacional¹⁰. Aunque la libertad de expresión está protegida en la Arabia Saudita, las acciones del Sr. Al-Ghamdi constituían actos terroristas. Los procedimientos y garantías adoptados en su caso se ajustaban a las normas internacionales relativas a la celebración de un juicio imparcial con las debidas garantías. Su sentencia condenatoria está respaldada por pruebas suficientes, su juicio se ha celebrado dentro de un plazo razonable y se han respetado todos sus derechos de defensa.

87. Todas las leyes nacionales están formuladas con suficiente precisión y claridad. El Reino protege la libertad de pensamiento y de expresión, y no se detiene a nadie por ejercer sus derechos y libertades.

88. El Gobierno afirma que solo se impone la pena de muerte por los delitos más graves y dentro de los límites más estrictos, y que esta solo se ejecuta una vez concluidos todos los procedimientos judiciales, respetando el derecho a un juicio imparcial con las debidas garantías, en cumplimiento de los compromisos internacionales contraídos por la Arabia Saudita en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Se remite a la resolución 1984/50 del Consejo Económico y Social.

89. El Gobierno afirma que la Ley de Lucha contra el Terrorismo y la Financiación del Terrorismo está en consonancia con la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, y se remite a varias resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Las medidas adoptadas contra el Sr. Al-Ghamdi se ajustan a lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

90. Según el Gobierno, el Sr. Al-Ghamdi fue detenido en aplicación de una orden de detención dictada por la autoridad competente, fue informado de los motivos de su detención y de sus derechos el día de su detención, y firmó un reconocimiento al respecto. Cuando lo interrogaron, le hicieron preguntas claras, sin engaños ni ambigüedades. Tras la investigación, la autoridad investigadora consideró que las pruebas contra el Sr. Al-Ghamdi eran suficientes para acusarlo. El artículo 115 del Código de Procedimiento Penal garantiza el derecho de toda persona a impugnar la legalidad de su detención o privación de libertad. El tribunal consideró necesario juzgar al Sr. Al-Ghamdi mientras estaba en prisión preventiva. Estas medidas eran compatibles con las normas internacionales pertinentes, incluido el principio 2 de los Principios y Directrices de las Naciones Unidas sobre el Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal, los principios 17 y 18 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, el principio 9 de los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, las medidas relativas al derecho de toda persona privadas

⁹ Véase la comunicación SAU 8/2023 en <https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownloadPublicCommunicationFile?gId=28381>.

¹⁰ Resolución 49/60 de la Asamblea General, anexo, párr. 3.

de libertad en forma de detención o reclusión a acudir a los tribunales, y el artículo 14, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

91. El Gobierno afirma que el Sr. Al-Ghamdi fue informado de su derecho a contar con asistencia letrada en la fase de instrucción y durante el juicio y que contrató a un abogado para que lo defendiera a expensas del Estado después de haberlo solicitado al tribunal, que se reunió periódicamente con su abogado en el lugar en el que estaba recluido para hablar de la causa y que se le proporcionaron los medios necesarios y el tiempo adecuado para preparar su defensa. Observa que las contramemorias presentadas por el abogado del Sr. Al-Ghamdi no contenían una solicitud de citación de testigos de descargo.

92. Según el Gobierno, el Sr. Al-Ghamdi asistió a su juicio en presencia del fiscal y fue juzgado por un tribunal independiente e imparcial, el Tribunal Penal Especializado, en un juicio imparcial y público. Ese tribunal fue creado por el Consejo Judicial Supremo en virtud del artículo 6 de la Ley del Poder Judicial, y sus actuaciones son iguales que las de otros tribunales penales previstas en la legislación nacional. Los jueces son nombrados por real decreto en virtud de una decisión del Consejo Supremo Judicial, de conformidad con el artículo 47 de la Ley del Poder Judicial, y ascienden en el escalafón judicial con arreglo a lo previsto en los artículos 31 a 42 de la ley. Para ser nombrados, deben haber obtenido una certificación acreditativa y cumplir determinadas condiciones.

93. El Gobierno niega toda vulneración inscrita en la categoría III. La legislación nacional garantiza el derecho a un juicio imparcial y público ante un tribunal independiente. El poder judicial deriva su autoridad y soberanía de la *sharia*, que consagra la justicia como el fundamento del juicio y garantiza la independencia judicial, de conformidad con los artículos 46, 48 y 49 de la Ley Fundamental de Gobierno y el artículo 1 de la Ley del Poder Judicial. La sentencia inicial dictada contra el Sr. Al-Ghamdi no se basó exclusivamente en su confesión, sino en todas las pruebas, a saber, los atestados de detención y registro, las declaraciones de los testigos y las deliberaciones del tribunal durante las cuales se admitieron varias diligencias, como las declaraciones testificales, las actas, las declaraciones de los testigos presenciales y el testimonio pericial de un patólogo. Además, la sentencia contra el Sr. Al-Ghamdi ha sido recurrida, y la situación ha sido y sigue siendo supervisada por la Comisión de Derechos Humanos, que no ha observado ningún indicio de vulneración de derechos.

94. En lo que respecta a las alegaciones relativas a la reclusión del Sr. Al-Ghamdi en régimen de aislamiento durante los primeros cuatro meses de su encarcelamiento, el Gobierno afirma que este fue detenido en aplicación de la Ley de Lucha contra el Terrorismo y la Financiación del Terrorismo, que reconoce a la autoridad encargada de la investigación el derecho a impedir que los acusados se comuniquen con terceros durante un plazo determinado en circunstancias excepcionales durante la investigación, sin perjuicio del derecho de estos a ponerse en contacto con sus familiares y representantes legales. Esa medida es compatible con las normas internacionales, entre ellas las Reglas Nelson Mandela y el principio 19 del Conjunto de Principios, y los acusados siguen gozando del derecho a recurrir la legalidad de su privación de libertad. Las medidas destinadas a impedir que los acusados se pongan en contacto con terceros en el Reino están sujetas a ciertas restricciones legales. En el Reino, la tortura está tipificada como delito castigado por la ley. Así, la Ley de Lucha contra el Terrorismo y la Financiación del Terrorismo estipula que solo puede imponerse la reclusión en régimen de aislamiento en circunstancias excepcionales previstas por la ley, sin perjuicio del derecho de los acusados a informar a sus familiares de su detención. El tribunal puede dictar una providencia que prohíba al acusado comunicarse con el mundo exterior o recibir visitas durante un período no superior a 90 días, si es necesario. El preso preventivo o recluso tiene derecho a presentar una reclamación, de conformidad con el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal.

95. El Gobierno niega que se impidiera al Sr. Al-Ghamdi presentar informes médicos sobre su estado de salud. El tribunal de primera instancia estudió la posibilidad de derivar al Sr. Al-Ghamdi a una autoridad médica para que examinara su estado de salud mental y psicológico y, después de examinar todo el expediente, citar al Sr. Al-Ghamdi y dar lectura al auto de procesamiento general, no vio motivo alguno para hacerlo. El Gobierno afirma además que el Sr. Al-Ghamdi goza de buena salud, ha estado en varios dispensarios y recibido los medicamentos necesarios y se somete a chequeos periódicos. El Gobierno se

remite al derecho interno del Estado parte. Afirma que el trato dispensado al Sr. Al-Ghamdi es acorde con las reglas 24, párrafo 1, 30 y 56, párrafo 1, de las Reglas Nelson Mandela y reitera que todas las personas privadas de libertad reciben atención médica gratuita y adecuada.

96. El Gobierno niega toda escucha de las llamadas telefónicas del Sr. Al-Ghamdi. Desde su detención, se ha respetado su derecho a recibir visitas y a mantener comunicaciones periódicas: ha recibido 14 visitas generales (la última el 18 de diciembre de 2023), 11 visitas privadas (la última el 17 de diciembre de 2023) y 57 llamadas telefónicas (la última el 26 de diciembre de 2023). Se le ha permitido reunirse periódicamente con su abogado en el lugar en el que se encuentra recluso y recibe un trato acorde con la regla 68 de las Reglas Nelson Mandela.

97. Por último, el Gobierno recuerda al Grupo de Trabajo que debe cumplir plenamente sus métodos de trabajo y el Código de Conducta para los Titulares de Mandatos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos aprobado por el Consejo en su resolución 5/2, de 18 de junio de 2007, y en particular las obligaciones que le imponen los artículos 6 a) a c), 9 a), d) y e), 12 y 13 a) y b).

c) Comentarios adicionales de la fuente

98. En su respuesta de 31 de enero de 2024, la fuente reitera sus alegaciones iniciales y proporciona información más detallada, que se examina a continuación, para rebatir las alegaciones del Gobierno. Alega que el Gobierno se limitó a negar la veracidad de las alegaciones sin demostrar que en el caso del Sr. Al-Ghamdi se hubieran respetado las garantías procesales mencionadas en su respuesta, y que la mera enumeración de las leyes aplicables no demuestra que se hayan respetado efectivamente esas garantías y, por tanto, no invalida las alegaciones de vulneración de los derechos del Sr. Al-Ghamdi.

2. Deliberaciones

99. El Grupo de Trabajo agradece a la fuente y al Gobierno la información que le han facilitado.

100. Para determinar el carácter arbitrario o no de la privación de libertad del Sr. Al-Ghamdi, el Grupo de Trabajo se atiene a los principios establecidos en su jurisprudencia acerca de su manera de proceder en relación con las cuestiones probatorias. Si la fuente ha presentado indicios razonables de una vulneración del derecho internacional constitutiva de detención arbitraria, debe entenderse que la carga de la prueba recae en el Gobierno en caso de que desee refutar las alegaciones. Las meras afirmaciones del Gobierno de que se han seguido los procedimientos legales no bastan para refutar las alegaciones de la fuente¹¹.

101. El Grupo de Trabajo desea recordar que, de conformidad con sus métodos de trabajo, puede tener en cuenta la información recibida en respuesta al llamamiento urgente conjunto mencionado por el Gobierno¹².

a) Categoría II

102. La fuente afirma que las acusaciones formuladas contra el Sr. Al-Ghamdi se refieren únicamente al ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de asociación y no implican otra cosa que la expresión de opiniones en línea, el visionado de vídeos y la participación en medios sociales. En sus comentarios adicionales, la fuente insiste en que, en su respuesta, el Gobierno no rebate ni niega que la actuación contra el Sr. Al-Ghamdi se debiera únicamente al contenido que había publicado y consultado en medios sociales. Añade que el planteamiento del Gobierno, según el cual la expresión por el Sr. Al-Ghamdi de sus opiniones constituye terrorismo y no una crítica pacífica, refuerza la idea de que su privación de libertad y la amenaza de morir ejecutado por haber sido condenado a muerte son producto de la

¹¹ A/HRC/19/57, párr. 68.

¹² Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 48/2016 y 50/2022.

represión generalizada de la disidencia, la oposición y la libertad de expresión en la Arabia Saudita.

103. La fuente hace esas alegaciones sobre la base de los siguientes elementos: a) un escrito judicial emitido el 26 de junio de 2022 en el que se confirman las acusaciones formuladas contra el Sr. Al-Ghamdi y se demuestra que estaban motivadas por las opiniones y preocupaciones que este había expresado en medios sociales y en las cuentas de medios sociales que había consultado y seguido; b) las preguntas que le hicieron cuando lo interrogaron después de ser detenido; y c) la sentencia dictada en su juicio, en la que lo declararon culpable de los delitos de los que se lo acusaba y lo condenaron a muerte. El Gobierno afirma que, aunque la libertad de expresión está protegida en la Arabia Saudita, las acciones del Sr. Al-Ghamdi constituían actos terroristas. El Grupo de Trabajo observa que el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos protege el derecho de toda persona a la libertad de expresión, que comprende la libertad de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. Este derecho abarca el pensamiento político y los comentarios sobre asuntos públicos, y ampara el mantener y expresar opiniones, también si son críticas o no son conformes con las políticas gubernamentales¹³. Tras sopesar las alegaciones de ambas partes, el Grupo de Trabajo considera que el comportamiento del Sr. Al-Ghamdi estaba amparado por el derecho a la libertad de opinión y de expresión, protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que este fue privado de libertad por ejercer pacíficamente esos derechos a través de sus publicaciones en medios sociales y de las cuentas de medios sociales que había consultado y seguido.

104. Según la fuente, tras la aprobación de la legislación antiterrorista en 2014, al parecer hubo una campaña represiva de detenciones de ciudadanos y activistas acusados de hechos relacionados con la libertad de opinión y de expresión. Aunque el Gobierno afirma que todas las leyes de la Arabia Saudita están formuladas con suficiente precisión y claridad, el Grupo de Trabajo recuerda que la Ley de Lucha contra el Terrorismo y la Financiación del Terrorismo, en virtud de la cual se acusó al Sr. Al-Ghamdi, no ofrece seguridad jurídica. El Grupo de Trabajo ha observado que esa ley se ha utilizado habitualmente para penalizar un amplio abanico de actos amparados por los derechos relativos a las libertades de opinión, de expresión, de reunión pacífica y de asociación, así como a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo considera que las acusaciones y condenas en virtud de las disposiciones de la ley que permiten penalizar la expresión pacífica de opiniones y admiten una interpretación arbitraria, de manera que a los ciudadanos les resulta difícil saber cómo deben actuar para cumplir la ley, no pueden considerarse compatibles con la Declaración Universal de Derechos Humanos¹⁴.

105. El Grupo de Trabajo está de acuerdo con la observación del Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo de que la ley antiterrorista de 2014 no cumple las normas internacionales de derechos humanos en materia de seguridad jurídica y que, en contravención de las normas básicas internacionales de derechos humanos, el artículo 1 de esa ley ha permitido penalizar un amplio abanico de actos de expresión pacífica que, a juicio de las autoridades, ponen en peligro la “unidad nacional” o socavan “la reputación o la posición del Estado”¹⁵. El Grupo de Trabajo observa que la Ley de Lucha contra el Terrorismo y la Financiación del Terrorismo de 2017 no ha tenido en cuenta esas preocupaciones.

106. Sobre la base de lo que antecede, el Grupo de Trabajo concluye que la privación de libertad del Sr. Al-Ghamdi es arbitraria, en contravención del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se inscribe en la categoría II.

¹³ Opiniones núms. 79/2017, párr. 55; y 8/2019, párr. 55.

¹⁴ Véanse las opiniones núms. 46/2011 y 45/2019, y [A/HRC/41/7](#), párrs. 38.73 y 38.171.

¹⁵ Opinión núm. 63/2017, párr. 62.

b) **Categoría III**

107. Habida cuenta de su conclusión de que la privación de libertad del Sr. Al-Ghamdi es arbitraria y se inscribe en la categoría II, el Grupo de Trabajo desea destacar que, en esas circunstancias, no debería haberse celebrado ningún juicio. Sin embargo, dado que sí hubo un juicio en primera instancia, el Grupo de Trabajo pasará a examinar si la presunta vulneración del derecho a un juicio imparcial con las debidas garantías procesales es de una gravedad tal que confiere a su privación de libertad carácter arbitrario con arreglo a la categoría III.

108. La fuente afirma que el Sr. Al-Ghamdi no tuvo acceso a un abogado durante los interrogatorios a los que fue sometido cuando estaba en régimen de aislamiento e incomunicación durante los cuatro meses siguientes a su detención en junio de 2022. En diciembre de 2022 le asignaron un abogado de oficio que, por temor a sufrir graves consecuencias como otros abogados y un exjuez a quienes les habían retirado la licencia, al parecer no quiso reconocer los trastornos mentales diagnosticados al Sr. Al-Ghamdi ni invocarlos como medios de defensa. Así pues, su familia tuvo que encargarse de buscar otro abogado, lo que resultó difícil porque muchos de los abogados a los que se dirigió se negaron a aceptar por miedo a represalias. Por tanto, el Sr. Al-Ghamdi estuvo sin representación letrada entre marzo y mayo de 2023, cuando se dio traslado de su caso al Tribunal Penal Especializado, y desde entonces, no ha sido autorizado a entrevistarse periódicamente con su abogado.

109. El Gobierno afirma que el Sr. Al-Ghamdi fue informado de su derecho a contar con asistencia letrada en la fase de instrucción y durante el juicio, que contrató a un abogado para que lo defendiera y representara a expensas del Estado, que se reunió periódicamente con su abogado en el lugar en el que estaba recluido y que su abogado dispuso de los medios necesarios y el tiempo adecuado para preparar su defensa.

110. En sus alegaciones adicionales, la fuente sostiene que el simple hecho de leer y notificar a una persona privada de libertad sus derechos teóricos, incluido el derecho a la asistencia letrada, no es suficiente si la realidad de sus circunstancias le impide beneficiarse de esas protecciones. Señala también que el Gobierno no menciona la fecha en que se proporcionó al Sr. Al-Ghamdi representación letrada a expensas del Estado. Según la fuente, fue en diciembre de 2022, al menos seis meses después de su detención. Además, afirma que, en su respuesta, el Gobierno no proporciona detalles sobre cuándo pudo el Sr. Al-Ghamdi reunirse con su abogado ni durante cuánto tiempo, en qué centro de reclusión y en qué lugar dentro del centro.

111. Como ya ha observado antes el Grupo de Trabajo, todas las personas privadas de libertad tienen derecho a la asistencia letrada de un abogado de su elección, en cualquier momento de su privación de libertad, en particular inmediatamente después de que se haya practicado la detención, y se debe facilitar ese acceso sin demora¹⁶. El Grupo de Trabajo observa que el Sr. Al-Ghamdi no tuvo acceso a un abogado de su elección mientras estuvo recluido en régimen de incomunicación y aislamiento. Por consiguiente, el Gobierno no respetó su derecho a disponer en todo momento de asistencia letrada, que es inherente al derecho a la libertad y la seguridad y al derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, según lo dispuesto en los artículos 3, 9, 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo considera que esta vulneración menoscabó considerablemente su capacidad de defenderse en cualquier procedimiento judicial posterior. Por lo tanto, concluye que se han infringido los artículos 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los principios 15, 17 y 18 del Conjunto de Principios, la regla 61 de las Reglas Nelson Mandela y el principio 9 y la directriz 8 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal. Además, el hecho de que el Sr. Al-Ghamdi haya sido condenado a muerte agrava

¹⁶ Véase el principio 9 de los Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre los Recursos y Procedimientos relacionados con el Derecho de Toda Persona Privada de Libertad a Recurrir ante un Tribunal. Opiniones núms. 63/2017, párr. 70; 93/2017, párr. 52; y 86/2020, párr. 78. Véase también [CAT/C/SAU/CO/2](#) y [CAT/C/SAU/CO/2/Corr.1](#), párrs. 14 y 15.

estas contravenciones, ya que es evidente que, en los casos sancionables con la pena capital, los acusados deben contar con la asistencia efectiva de un abogado en todas las etapas del proceso.

112. La fuente afirma que el Sr. Al-Ghamdi sufrió otras vulneraciones de su derecho a un juicio imparcial con las debidas garantías. Sostiene que el hecho de que solo pudiera consultar a un abogado y comunicarse con él de manera limitada cuando estuvo encarcelado y fue interrogado y no pudiera entrevistarse periódicamente con el nuevo abogado que contrató socavó su capacidad para preparar y presentar su defensa. El hecho de que se impidiera a su abogado citar testigos, presentar informes médicos y solicitar un examen médico durante el juicio también socavó la defensa del Sr. Al-Ghamdi, lo que vulneró sus derechos a un juicio imparcial con las debidas garantías. El Gobierno afirma en términos generales que el Sr. Al Ghamdi tuvo un juicio imparcial y público en el que se protegieron todos sus derechos. El Grupo de Trabajo observa las observaciones detalladas de la fuente y concluye que se vulneraron los derechos del Sr. Al-Ghamdi a la igualdad de medios procesales, a disponer de tiempo suficiente para preparar su defensa y a tener un juicio imparcial según lo establecido en los artículos 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

113. El Gobierno señala que la sentencia inicial dictada contra el Sr. Al-Ghamdi se basó en pruebas suficientes aportadas en el juicio, entre ellas la confesión de este. El Grupo de Trabajo ya ha establecido que el Sr. Al-Ghamdi estuvo recluido en régimen de aislamiento e incomunicación y fue interrogado sin que estuviera presente un abogado. Como ya ha indicado anteriormente, las confesiones hechas sin representación legal no son admisibles como prueba en un proceso penal¹⁷. Además, la admisión como prueba de una declaración presuntamente obtenida mediante tortura o malos tratos menoscaba la imparcialidad de todo el proceso, con independencia de que se disponga de otras pruebas que respalden la sentencia¹⁸. Corresponde al Gobierno demostrar que las declaraciones se hicieron libremente¹⁹, pero no lo ha hecho.

114. Por consiguiente, el Gobierno no respetó el derecho del Sr. Al-Ghamdi a disponer en todo momento de asistencia letrada, que es inherente al derecho a la libertad y la seguridad y al derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, con todas las garantías necesarias para su defensa, según lo dispuesto en los artículos 3, 9, 10 y 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

115. La fuente menciona diversas vulneraciones del derecho a un juicio imparcial con las debidas garantías y afirma que se ha vulnerado el derecho del Sr. Al-Ghamdi a un juicio imparcial porque el Tribunal Penal Especializado no es un tribunal independiente ni imparcial. El Gobierno sostiene que el Tribunal Penal Especializado es un tribunal independiente e imparcial que aseguró al Sr. Al-Ghamdi un juicio imparcial y público. En sus alegaciones adicionales, la fuente señala que el Tribunal Penal Especializado seguía una tendencia bien documentada consistente en perseguir y enjuiciar a personas que expresaban opiniones o críticas, y que el Gobierno no respondió directamente a ninguna de las alegaciones sobre las preocupaciones planteadas en relación con el Tribunal Penal Especializado, entre otras cosas por el hecho de que no revelara la identidad de los magistrados y se negara a permitir que la familia del Sr. Al-Ghamdi asistiera a la sesión en la que se dictó sentencia y que el Sr. Al-Ghamdi cuestionara la exactitud de las declaraciones que le atribuían.

116. El Grupo de Trabajo recuerda su jurisprudencia anterior en la que ha establecido que el Tribunal Penal Especializado no es suficientemente independiente del Ministerio del Interior²⁰, preocupación que comparte el Comité contra la Tortura²¹. Observa además que el ex Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo ha afirmado que, a raíz de la

¹⁷ A/HRC/45/16, párr. 53. Véanse también las opiniones núms. 1/2014, párr. 22, y 41/2020, párr. 70; y E/CN.4/2003/68, párr. 26 e).

¹⁸ Opinión núm. 73/2019, párr. 91.

¹⁹ Opinión núm. 41/2020, párr. 70.

²⁰ Opiniones núms. 10/2018, párr. 73; 27/2023, párrs. 102 a 104; y 56/2023, párr. 108.

²¹ CAT/C/SAU/CO/2 y CAT/C/SAU/CO/2/Corr.1, párr. 17.

reestructuración de la Administración, las facultades de investigación del Ministerio han pasado a depender directamente de la autoridad de la Fiscalía y de la Presidencia de la Seguridad del Estado, ambas directamente dependientes del Rey, y que, por consiguiente, sigue habiendo dudas sobre la independencia del Tribunal Penal Especializado²².

117. Por lo tanto, el Grupo de Trabajo sigue preocupado por la independencia e imparcialidad del Tribunal Penal Especializado y por el respeto de la presunción de inocencia y las garantías necesarias para la defensa. Así, considera que el juicio celebrado ante el tribunal contravino el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.

118. La fuente afirma que no se ha respetado el derecho del Sr. Al-Ghamdi a comunicarse con su familia, lo que constituye otra vulneración de su derecho a un juicio imparcial con las debidas garantías. El Gobierno sostiene que se ha respetado su derecho a recibir visitas y mantener comunicaciones periódicas, e indica el número de llamadas telefónicas y de visitas generales y privadas que ha recibido. En sus observaciones adicionales, la fuente señala que, en su respuesta, el Gobierno no facilitó información sobre el alcance de las comunicaciones o el intervalo entre estas, por lo que la afirmación de que el Sr. Al-Ghamdi mantenía comunicaciones periódicas carece de fundamento.

119. Habida cuenta de las observaciones detalladas de la fuente, el Grupo de Trabajo concluye que se ha denegado al Sr. Al-Ghamdi el derecho a que se respetaran las debidas garantías procesales, en particular su derecho a recibir visitas de sus familiares y mantener correspondencia con ellos, así como a tener oportunidades adecuadas de comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho, de conformidad con los principios 15 y 19 del Conjunto de Principios y con las reglas 43, párrafo 3, 58 y 68 de las Reglas Nelson Mandela²³. En particular, observa que, al parecer, lo han trasladado a una prisión situada a 945 km del lugar en el que reside su familia, lo que le impide recibir visitas familiares periódicas. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo concluye que ese traslado ha privado al Sr. Al-Ghamdi de la protección prevista en la regla 59 de las Reglas Nelson Mandela, que exige que, en la medida de lo posible, los reclusos sean internados en establecimientos penitenciarios cercanos a su hogar. Autorizar el acceso sistemático y sin demora a los familiares, así como a personal médico y abogados independientes, es una salvaguardia esencial y necesaria para la prevención de la tortura y para la protección contra la reclusión arbitraria y los atentados contra la seguridad personal²⁴. Al impedir que el Sr. Al-Ghamdi viera a su familia y se comunicara con ella durante los primeros cuatro meses de su reclusión, cuando estuvo en régimen de aislamiento, esta no pudo ayudarlo antes a contratar a un abogado adecuado.

120. La fuente afirma que, durante los primeros cuatro meses de su reclusión después de que lo detuvieran el 11 de junio de 2022, el Sr. Al-Ghamdi estuvo en régimen de aislamiento e incomunicación, fue interrogado y no tuvo acceso a un abogado. El Gobierno, que no lo niega, explica que la Ley de Lucha contra el Terrorismo y la Financiación del Terrorismo, en aplicación de la cual se detuvo al Sr. Al-Ghamdi, reconoce a la autoridad encargada de la investigación el derecho a impedir que los acusados se comuniquen con terceros durante un plazo determinado en circunstancias excepcionales durante la investigación. Entre otras medidas, esta puede ordenar la reclusión en régimen de aislamiento durante un período no superior a 90 días si lo considera necesario. En sus alegaciones adicionales, la fuente afirma que el Gobierno no explica por qué la reclusión del Sr. Al-Ghamdi en régimen de aislamiento fue necesaria para la investigación por circunstancias excepcionales. Además, la duración de esa reclusión, de cuatro meses, superó el plazo máximo de 90 días establecido en su propia legislación.

121. En lo que respecta a la reclusión del Sr. Al-Ghamdi en régimen de aislamiento, el Grupo de Trabajo recuerda que el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas

²² A/HRC/40/52/Add.2, párr. 47.

²³ Opiniones núms. 35/2018, párr. 39; y 44/2019, párrs. 74 y 75.

²⁴ Opinión núm. 84/2020, párr. 70.

cruels, inhumanos o degradantes ha considerado régimen de aislamiento prolongado el que exceda de 15 días, ya que a partir de ese momento algunos de los efectos psicológicos nocivos del aislamiento pueden ser irreversibles²⁵. El Grupo de Trabajo observa que, de conformidad con la regla 45 de las Reglas Nelson Mandela, la imposición de la reclusión en régimen de aislamiento debe ir acompañada de ciertas salvaguardias. El Gobierno no ha demostrado que se establecieran salvaguardias ni justificado la aplicación del régimen de aislamiento, que es una medida de último recurso, ni tampoco ha explicado por qué el Sr. Al-Ghamdi estuvo en régimen de aislamiento durante cuatro meses, en contravención de la legislación nacional.

122. El Gobierno sostiene que la tortura está tipificada como delito castigado por la ley. La fuente señala que el Gobierno se limita a hacer referencia a la existencia de salvaguardias legales sin proporcionar ninguna información para refutar las afirmaciones de la fuente de que el Sr. Al-Ghamdi ha sido sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes y, potencialmente, a tortura psicológica, incluida la reclusión en régimen de aislamiento.

123. Según la fuente, el Sr. Al-Ghamdi ha sido sometido a enormes presiones y sufrimientos emocionales y psicológicos porque lo recluyeron en régimen de aislamiento, sin explicación alguna, durante los cuatro primeros meses de su encarcelamiento sin poder acceder a un abogado ni comunicarse con su familia; porque no se le ha permitido tener un abogado durante una gran parte del tiempo que ha estado recluido; y porque no le han prestado atención médica ni le han proporcionado medicamentos, lo que ha provocado un deterioro de su estado de salud. El Gobierno afirma que goza de buena salud, ha estado en varios dispensarios y recibido los medicamentos necesarios y se somete a chequeos periódicos. En sus observaciones adicionales, la fuente sostiene que las meras afirmaciones del Gobierno no bastan para demostrar que el Sr. Al-Ghamdi recibió realmente ese trato.

124. El Grupo de Trabajo recuerda que la denegación de atención médica puede constituir una forma de tortura y de trato cruel e inhumano²⁶. Teniendo en cuenta la gravedad de las alegaciones, concluye que las transgresiones cometidas en relación con las condiciones de reclusión del Sr. Al-Ghamdi, sumadas al hecho de que no le prestaran atención médica, menoscabaron significativamente su capacidad de defenderse adecuadamente. El Grupo de Trabajo ha concluido sistemáticamente que no es posible que una persona sometida a tortura u otras formas de malos tratos o penas pueda preparar una defensa adecuada antes del juicio, lo que vulnera su derecho a un juicio imparcial²⁷.

125. El Grupo de Trabajo concluye que la vulneración del derecho del Sr. Al-Ghamdi a un juicio imparcial con las debidas garantías es de una gravedad tal que confiere a su privación de libertad carácter arbitrario con arreglo a la categoría III.

c) Observaciones finales

126. Si bien el Gobierno sostiene que el Sr. Al-Ghamdi goza de buena salud, el Grupo de Trabajo está preocupado por los numerosos problemas de salud señalados por la fuente, incluidos sus trastornos mentales. El Grupo de Trabajo se ve obligado a recordar al Gobierno la obligación que le incumbe en virtud del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de las reglas 1, 24, 27 y 118 de las Reglas Nelson Mandela, y que todas las personas privadas de libertad deben ser tratadas humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano²⁸, lo que incluye que se les permita disfrutar de los mismos niveles de atención de salud que los que existen en la comunidad.

127. En sus 30 años de historia, el Grupo de Trabajo ha constatado que el Gobierno ha incumplido sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en más de 75 casos²⁹, y expresa una vez más preocupación por que esto indique un problema generalizado o sistémico de detención arbitraria en la Arabia Saudita, lo que constituye una grave violación del derecho internacional. Recuerda que, en determinadas circunstancias, el encarcelamiento

²⁵ A/66/268, párrs. 26 y 61. Véase también A/63/175, párr. 56.

²⁶ A/HRC/38/36, párr. 18, y opinión núm. 20/2022, párr. 104.

²⁷ Opiniones núms. 32/2019, párr. 42; 59/2019, párr. 69; y 65/2022, párr. 117.

²⁸ Opinión núm. 26/2017, párr. 66.

²⁹ Véanse, por ejemplo, las opiniones núms. 55/2023 y 56/2023.

generalizado o sistemático u otras formas graves de privación de libertad contrarias a las normas del derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad³⁰.

128. El Grupo de Trabajo celebra las promesas de contribución voluntarias formuladas por la Arabia Saudita en cumplimiento de la resolución 60/251 de la Asamblea General relativa al Consejo de Derechos Humanos³¹. En particular, encomia la voluntad expresada por el Gobierno de cooperar con el Consejo y sus diversos mecanismos, incluidos los procedimientos especiales. En vista de ello, y recordando que el 24 de agosto de 2021 y el 4 de febrero de 2022 reiteró su solicitud de realizar una visita al país, el Grupo de Trabajo acogería con satisfacción, tan pronto como al Gobierno le parezca oportuno, la oportunidad de visitar la Arabia Saudita con el fin de entablar un diálogo constructivo con el Gobierno y ofrecerle asistencia para abordar las graves preocupaciones suscitadas respecto de los casos de privación arbitraria de libertad.

3. Decisión

129. En vista de lo anterior, el Grupo de Trabajo emite la siguiente opinión:

La privación de libertad de Muhammad al-Ghamdi es arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 3, 9, 10, 11 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y se inscribe en las categorías II y III.

130. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno de la Arabia Saudita que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Al-Ghamdi sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

131. El Grupo de Trabajo considera que, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería poner a Sr. Al-Ghamdi inmediatamente en libertad y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional.

132. El Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Al-Ghamdi y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos.

133. El Grupo de Trabajo pide al Gobierno que adapte sus leyes, en particular la Ley de Lucha contra el Terrorismo y la Financiación del Terrorismo, a las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a los compromisos contraídos por la Arabia Saudita en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.

134. De conformidad con el párrafo 33 a) de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo remite el presente caso a la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados para que tome las medidas correspondientes.

135. El Grupo de Trabajo recomienda al Gobierno que se adhiera al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

136. El Grupo de Trabajo solicita al Gobierno que difunda la presente opinión por todos los medios disponibles y lo más ampliamente posible.

4. Procedimiento de seguimiento

137. De conformidad con el párrafo 20 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que le proporcionen información sobre las medidas de seguimiento adoptadas respecto de las recomendaciones formuladas en la presente opinión, en particular:

- a) Si se ha puesto en libertad al Sr. Al-Ghamdi y, de ser así, en qué fecha;
- b) Si se han concedido indemnizaciones u otras reparaciones al Sr. Al-Ghamdi;

³⁰ A/HRC/13/42, párr. 30. Véanse también las opiniones núms. 37/2011, párr. 15; y 51/2017, párr. 57.

³¹ Véase A/75/377.

c) Si se ha investigado la violación de los derechos del Sr. Al-Ghamdi y, de ser así, el resultado de la investigación;

d) Si se han aprobado enmiendas legislativas o se han realizado modificaciones en la práctica para armonizar las leyes y las prácticas de la Arabia Saudita con sus obligaciones internacionales de conformidad con la presente opinión;

e) Si se ha adoptado alguna otra medida para aplicar la presente opinión.

138. Se invita al Gobierno a que informe al Grupo de Trabajo de las dificultades que pueda haber encontrado en la aplicación de las recomendaciones formuladas en la presente opinión y a que le indique si necesita asistencia técnica adicional, por ejemplo, mediante una visita del Grupo de Trabajo.

139. El Grupo de Trabajo solicita a la fuente y al Gobierno que proporcionen la información mencionada en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de la presente opinión. No obstante, el Grupo de Trabajo se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento de la opinión si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso. Este procedimiento de seguimiento permitirá al Grupo de Trabajo mantener informado al Consejo de Derechos Humanos acerca de los progresos realizados para aplicar sus recomendaciones, así como de todo caso en que no se haya hecho nada al respecto.

140. El Grupo de Trabajo recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha alentado a todos los Estados a que colaboren con el Grupo de Trabajo, y les ha pedido que tengan en cuenta sus opiniones y, de ser necesario, tomen las medidas apropiadas para remediar la situación de las personas privadas arbitrariamente de libertad, y a que informen al Grupo de Trabajo de las medidas que hayan adoptado³².

[Aprobada el 19 de marzo de 2024]

³² Resolución 51/8 del Consejo de Derechos Humanos, párrs. 6 y 9.